COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE. COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ENCARGADA DE FISCALIZAR A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, EN RELACIÓN A MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR RESPUESTA A LA MEGA SEQUÍA Y PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (CEI 38).

**Acta de la sesión N° 6
Lunes 20 de enero de 2020, de 11:00 a 13:00 horas.**

I.- PRESIDENCIA

Presidió la diputada señorita **Daniella Cicardini**.

Actuó como abogado Secretario, el señor Hernán Almendras Carrasco y como secretaria ejecutiva, la señora Paula Batarce Valdés.

II.- ASISTENCIA

Asistieron la diputada señora Carolina Marzán y los diputados señores Ramón Barros, Sergio Gahona, Issa Kort, Andrés Longton, Cosme Mellado y Marcelo Schilling.

Concurrieron, además, el ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, acompañado del director de Obras Hidráulicas, señor Claudio Darrigrandi.

V.- ORDEN DEL DÍA

Recibir al ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, acompañado del director de Obras Hidráulicas, señor Claudio Darrigrandi.

El **ministro de Obras Públicas** hizo una extensa exposición y dio respuesta detallada a las preguntas y observaciones formuladas por las diputadas y diputados.

El detalle de lo obrado en esta sesión queda registrado en un archivo de audio digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 256 del Reglamento.

Se adjunta al término de este documento, el acta taquigráfica de la sesión, en la

cual consta la transcripción de las intervenciones de las y los invitados y/o citados, como de quienes integran esta Comisión.

Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, se levantó a las 13:00 horas.

DANIELLA CICARDINI MILLA
Presidenta de la Comisión

HERNÁN ALMENDRAS CARRASCO
Abogado Secretario de la Comisión

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ENCARGADA DE FISCALIZAR A ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, EN RELACIÓN CON MEDIDAS ADOPTADAS PARA DAR RESPUESTA A MEGASEQUÍA Y PARA ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO

Sesión 6ª, celebrada en lunes 20 de enero de 2020, de 11.00 a 13.00 horas.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Preside la diputada señorita Daniella Cicardini.

Asisten la diputada señora Carolina Marzán y los diputados señores Ramón Barros, Sergio Gahona, Issa Kort, Andrés Longton, Cosme Mellado y Marcelo Schilling.

Concurrieron, además, el ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, acompañado del director de Obras Hidráulicas, señor Claudio Darrigrandi.

TEXTO DEL DEBATE

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.

*-El señor **ALMENDRAS** (Secretario) da lectura a la Cuenta.*

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.

Ofrezco la palabra en puntos varios.

Entiendo que el ministro de Obras Públicas y el director de la DGA vienen juntos y están atrasados. ¿Le parece a la Comisión suspender hasta que lleguen?

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Continúa la sesión.

Quiero dar la más cordial bienvenida al ministro de Obras Públicas, al director de Obras Hidráulicas, y a la jefa de Fiscalización, de la Dirección General de Aguas.

Tiene la palabra, señor ministro.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señora Presidenta, muy buenos días. Por su intermedio saludo al resto de los integrantes de la comisión.

Tal como usted mencionaba, quedaron varias preguntas pendientes y a eso quiero abocarme, sin perjuicio de las adicionales que puedan surgir durante la sesión.

En la recolección que tengo de las preguntas, el diputado Ramón Barros plantea que el tiempo promedio de desarrollo de un embalse, que yo mencioné, 14,5 años, es muy extenso y cree que debemos planificar mejor el desarrollo de los embalses en el largo plazo.

Más que hacer una contestación sobre eso, traje una copia del informe de la Comisión Nacional de Riego y se los voy a dejar, que establece cuáles son los períodos que se requieren para cada cosa y cómo se llega a ese cálculo, que es este documento: Plan de grandes embalses, los procesos y los estados de las obras. Está dividido en las dos maneras en que se puede hacer un embalse, por concesión o por obra pública. En cualquiera de los casos los tiempos, si un embalse parte en el año 2020, recién podría empezar a estar operativo, en el caso de obra pública, en el año 2037 y, en el otro, podría recién estar en el año 2033, 2034, o sea, en promedio es como 14,5 años. Aquí están los detalles. Básicamente, lo que es el diseño y la parte medioambiental son lo que demora más años. Obtener una resolución ambiental toma del orden de 6 años; la prefactibilidad, 2,5 años; la factibilidad, 3 años; los inicios de la construcción, 2 años, en fin. Así que ahí está el detalle de cómo se llega.

Hay también un detalle de cada uno de los embalses, dentro de los embalses priorizados, y muestra lo que se está haciendo, y los tiempos que tienen hacia adelante, que también puede ser interesante.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Muchas gracias. Se lo haremos llegar a los diputados.

Tiene la palabra el diputado Issa Kort.

El señor **KORT**.- Gracias, Presidenta, por su intermedio al ministro.

Ministro, sobre el punto. Usted plantea que son 14,5 años promedio, ¿pero se pueden ir avanzando en etapas paralelas? Lógicamente, usted tiene que tener el diseño primero para recién presentarlo al tema medioambiental, ¿pero se puede trabajar un poco para ir avanzando? Porque creo que es muchísimo el tiempo y usted debe tener la misma opinión. Tal vez podemos hacer más eficiente el sistema, sin saltarse ningún proceso, pero hacerlo en paralelo.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- No muchas de las cosas se pueden hacer en paralelo porque la prefactibilidad y la factibilidad es una detrás de la otra; para tener la evaluación ambiental se requiere saber de qué se trata el embalse.

Entonces, el problema son los requisitos que tiene cada una de las etapas. Es posible que haya otra solución, pero yo creo que en lo grueso hay que meterse más en el detalle de lo que se requiere en cada uno de los casos.

En la medida que ha ido pasando el tiempo se ponen más requisitos para cautelar otros elementos que pueden ser muy necesarios, pero que cuando se van acumulando también va generando el costo de tener las demoras que estamos hablando.

Hay que tomar en cuenta que un embalse tiene un área de inundación muy grande, afecta a población, afecta fauna, flora, o sea, los impactos pueden ser grandes.

Incluso, para hacer los estudios de la calidad del suelo, por ejemplo, donde se va a poner el agua, ya hay que hacer una tramitación ambiental. Entonces, lo que hay que equilibrar son los costos y beneficios de cada una de las cosas y ver de qué manera se pueden obtener todos esos beneficios sin tanta demora.

La segunda pregunta del diputado Barros tenía que ver con lo que iba a suceder a partir de los meses de abril y mayo, en los cuales se cierran los canales de distribución de agua en la agricultura, o sea, se cierran las bocatomas. Los canales de distribución interno, a través de los campos, quedan secos, y su preocupación, como esos canales de alguna manera infiltran, era que pudiesen afectar y tener una situación aun más compleja en los pozos de agua potable rural.

Por esa misma razón en abril del año 2019, o sea, del año pasado, la Dirección General de Aguas emitió la circular N° 02, que estableció las condiciones para exceptuarse de cumplir la orden de cierre de las bocatomas, lo que va a permitir mantenerlas en operación para conducir agua de distintos usos, considerándose entre ellos la recarga o la infiltración de acuíferos.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ministro, disculpe, quería hacerle una pregunta a propósito del tema de los embalses, de la construcción, de la demora, del tiempo. ¿Usted comparte la indicación que en algún minuto ingresó el ministro de Agricultura, a propósito de quedar exento de la evaluación de impacto ambiental en los proyectos de embalse?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- No lo conozco en detalle.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Fue ingresada como indicación en la ley de Presupuestos de 2020.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Sí, pero se refiere al financiamiento que da la Comisión Nacional de Riego. No cambia las normas.

En esto hay que ser cuidadosos. Las normas de impacto ambiental tienen su carril y se tienen que cumplir.

Las normas por las cuales se financian y se hacen aportes a determinadas obras era lo que estaba en cuestión y tenía que ver con la ley de Presupuestos. La ley de presupuestos permitía no requerir eso, porque se podía obtener en otro

momento o, a lo mejor, no era necesario, dependiendo de lo que estableciera el Sistema de Impacto Ambiental. El tema era permitir que la Comisión Nacional de Riego, en base a su sistema de incentivo y de subsidio a las obras de riego, pudiera apoyar estas obras, no solamente embalses pequeños, sino los que son un poco más grandes. Igual no son tan grandes, pero llamémosles medianos, por llamarlos de alguna manera.

Entonces, eso solo tenía que ver con la ley de presupuestos y no tenía relación con lo otro. Se entendió que no se podía hacer y que tenía que haber este otro punto en la Comisión Nacional de Riego. Por lo tanto, hoy día no se puede hacer.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Por lo que resolvió el Tribunal Constitucional.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Exacto.

Para poder hacer uso de lo que mencioné, de mantener abierto y con agua un canal de distribución, de manera tal de mantener sin filtración, por supuesto, las personas que lo quieran hacer deben disponer del personal, determinar cuál es el plan de acción que van a hacer, informar previamente a la Dirección Regional de Aguas, al municipio, a la gobernación, en fin, sobre el destino, el uso de las aguas -porque esto afecta a otras personas- y quiénes van a ser los responsables de esa operación.

Eso con respecto a las preguntas del diputado Pardo.

El diputado Sergio Gahona tenía una serie de preguntas que creo que creo que son importantes y, de alguna manera, se suman a las que otro diputado o diputada formuló relativo a lo que se había hecho con una comisión que dirigió el señor Ruiz. La pregunta del diputado Gahona tiene que ver con el trabajo que hizo el Banco Mundial en materia hídrica, que ha tenido varias etapas, porque ha estado trabajando con el gobierno chileno en varias oportunidades. La pregunta se refería a qué se ha avanzado en esas sugerencias, cuánto falta, en fin.

Básicamente, el Banco Mundial, en sus diagnósticos de 2011, tenía diez puntos que, creo, resumen lo que se ha avanzado.

El primero, se refiere a que el país debe preocuparse de mejorar los derechos de agua de los grupos vulnerables y los requerimientos hídricos del medio ambiente. O sea, decía que aquí hay un mercado del agua, hay una ley del agua para los incentivos productivos, que funciona razonablemente bien, pero que hay ciertos grupos vulnerables que hay que cautelar y, adicionalmente, hay que preocuparse del medio ambiente.

Respecto de eso, quiero mencionar algunas cosas:

En primer lugar, la indicación que hizo el gobierno respecto de la prioridad del consumo humano y, además, el fortalecimiento del caudal ecológico. Esas cosas que eran mucho más débiles en la legislación original hoy día están mucho más presentes y son materia de acuerdos en todas las normas nuevas que se están discutiendo. Ya en 2005 se creó este caudal ecológico y ha seguido evolucionando respecto de cómo se determina.

En cuanto al fortalecimiento del consumo humano, creo que es muy importante lo que se señala sobre el sistema de APR. El consumo humano realmente más débil está en las zonas rurales. Chile tiene muy buenos estándares en materia de distribución de agua en las ciudades, tiene cobertura total, tiene calidad de agua, donde se puede tomar agua en cualquier ciudad, lo que no es usual, porque son muy pocos los países donde en cualquier parte se abre la llave y se puede tomar agua sin ningún problema; tiene tratamiento de las aguas servidas prácticamente al ciento por ciento. De tal manera que en las ciudades tenemos una situación no solamente de buena calidad y cobertura, sino también es un situación resiliente. Por ejemplo, hoy estamos en la sequía más profunda y aún -espero que así sigamos- no hemos tenido problemas en ningún sector urbano.

Sin perjuicio de lo anterior, la realidad en el campo es muy diferente. Tenemos personas que no tienen acceso a agua potable, tenemos sistemas de APR que son muy frágiles,

tenemos más de 200 sistemas que tienen dificultades de abastecimiento y, como digo, personas que no tienen acceso a ningún sistema y reciben agua de un camión aljibe en un estanque de su casa.

Entonces, a través de todos los últimos gobiernos el crecimiento en la inversión en APR ha sido la norma. Si recuerdan, esto se nota tanto en los montos como en la proporción de lo que se gasta.

En el período 2010-2013 los APR eran 53 por ciento de lo que se invertía en agua; en el período 2014-2017 subió al 58 por ciento y en el actual período, entre 2018-2020, el 65 por ciento de lo que se invierte en agua es para la población más vulnerables en el sector rural.

El presupuesto para 2020 es de 157 millones de dólares. Esperamos tener para el presupuesto de 2021 188 millones de dólares. Pero ya los 157 millones de dólares es el presupuesto más alto que hayamos tenido en materia de APR en la historia.

Además, está el anuncio del ministro Briones de hacer un aporte de 200 millones de dólares en reactivación económica. Todo ese monto podría ser gastado en caminos y/o APR. Por lo tanto, nos permite enfrentar la emergencia, donde hay muchos pozos que han quedado con un abastecimiento que lo pierde o no da para todo el consumo.

En tercer lugar, los derechos de agua en los sistemas de APR, que pueden o no tener agua. Cosa distinta es que tengan derecho legal a sacar agua. Es decir, se construyeron estos sistemas, pero no se les otorgaron derechos de agua. Por tanto, es un tema que hay que regularizar.

Aquí tengo un detalle de todos los estudios que se han realizado para determinar las necesidades de derechos de agua que tiene cada uno de estos sistemas. La idea es que todos los APR tengan los derechos de agua que les corresponde, no solamente los que requieren hoy, sino lo que es la proyección de las necesidades de esos sistemas. Ya hemos comenzado a entregarles derechos a quienes hemos dimensionado.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ministro, a propósito de que hay algunos que no tienen derechos, ¿se tiene claridad de cuánta es el agua que se consume?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Claro, para saber cuánto es el derecho de agua que le tengo que entregar, tengo que hacer un análisis de cuánta es el agua que necesita consumir, de acuerdo a la población que abastece, y, adicionalmente, cuál es la proyección que va a tener ese sistema, para saber en unos años más qué es lo que va a requerir. De manera que tenga todos los derechos que necesita hoy y, también, en el futuro previsible.

El señor **GAHONA**.- La nueva ley de servicios sanitarios establece un determinado caudal de litros por segundo, que deberían ser de exclusiva prioridad para los sistemas de APR.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- La nueva ley de servicios sanitarios rurales cambia radicalmente. Es una ley que estaba vigente, solo falta el reglamento, que ha tenido una tramitación larguísima. El que presentó el gobierno anterior fue rechazado por la Contraloría, volvió, lo hicimos de nuevo y en este momento está en la Contraloría. La ley comienza a regir una vez que el reglamento esté aprobado.

Entonces, esa ley cambia radicalmente lo que sucede con los servicios de APR, porque quedan regulados por la superintendencia. Tienen que cumplir con requisitos de calidad del agua, tienen que dar las explicaciones de cómo se determina la tarifa, porque hoy día es una cosa libre entre el comité y la población que es atendida. Por tanto, debe haber un sistema respecto de cómo se determina la tarifa, deben demostrar que tienen resiliencia en el sistema, es decir, si hay una sequía, saber de dónde va a venir el agua, tienen que tener planes de contingencia. O sea, es elevar el nivel de lo que ahí sucede.

El seño **GAHONA**.- Eso va a implicar inversiones.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Sí, claro.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Issa Kort.

El señor **KORT**.- Señor ministro, por su intermedio, señorita Presidenta, los APR, en general, tienen dos grandes fragilidades, dos puntos débiles: la capacidad de agua que tenga el pozo, incluso, a nivel de derechos, y el abastecimiento energético, porque se necesita tener motores para extraer el agua o para impulsar el agua para que llegue a distintos sectores, pero no pueden hacer un pozo para cada cliente o para cada consumidor.

Ministro, más allá de lo que la ley establece, se lo planteo desde el punto de vista de la crisis que estamos enfrentando, y nosotros, en el secano costero de la Región de O'Higgins, tenemos una realidad bien importante, quiero saber si hay ayuda, si hay compromiso por parte del municipio. Se lo pregunto, porque una cosa es que la ley se pueda cumplir, pero otra es que se pueda llegar con agua, o con las empresas distribuidoras de energía. En el fondo, ¿cómo funciona eso en medio de la coyuntura? No sé si usted tiene esa información.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Tal como usted señala, hay dos realidades que conviven: una es el plan de construcción de nuevos APR. El plan del gobierno es construir 165 sistemas nuevos, amén de ampliar otros 254, y eso va a ir acercándose para llegar al orden de 85 por ciento de cobertura, de lo que se denomina los semiconcentrados, que es lo que se puede atender con un sistema de APR. Pero al mismo tiempo, la emergencia ha mostrado las debilidades del sistema. Particularmente, no he visto tanto el problema de potencia de las bombas, como el problema de que los pozos tienen muy poca profundidad.

Normalmente, cuando hay sequía, lo primero que se seca es el APR, versus un agricultor, que tiene una cuestión mucho más profunda y tiene que ver con un tema que, probablemente, está en el resto de las preguntas que voy a contestar. Me refiero a la nueva realidad: que parte muy importante de las aguas hoy provienen de fuentes subterráneas y no de los ríos.

En los ríos, la distribución del agua; la proporcionalidad cuando baja el abastecimiento; el cuidado frente a que no haya robo de agua, está todo bien cautelado, es decir, hay décadas de operación; hay juntas de vigilancias; hay celadores; hay marcos y, bueno, todo se mueve. Y, además, uno está viendo la cantidad de agua.

Pero aquí la situación muy diferente. Por eso que la Ley N° 21.064, del año 2018, es vital. En los puntos siguientes de las respuestas les voy a explicar cómo esta apunta a cambiar la realidad que vivimos. En la actualidad, es muy difícil fiscalizar personas que, por ejemplo, tengan un pozo y que estén sacando sin derecho, porque basta tener una bomba. No hay una organización de usuarios que esté preocupado de cuidar este bien común, que vaya y diga: oiga, yo denuncio que tal señor está sacando sin derecho. Entonces, en los sistemas, solo la ley N° 21.064 está cambiando esa situación.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Nos decía que después va a ahondar...

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señorita Presidenta, si quiere parto con eso inmediatamente, porque el segundo punto que pensaba tocar era el del Banco Mundial.

Entonces, tiene que ver con mantener la seguridad hídrica de los derechos de agua existente, y ahí, a mi juicio, el principal avance tiene que ver con la Ley N° 21.064, ley iniciada en el gobierno del Presidente Piñera y terminada en el gobierno de la Presidenta Bachelet, publicada en 2018. Esta ley permite fiscalizar las aguas subterráneas, es decir, todo pozo que tiene derechos tiene que tener un caudalímetro, porque hoy no es posible saber cuánta agua se está sacando.

En segundo lugar, todo pozo de cierto tamaño hacia arriba, tiene que tener, por telemetría, información inmediata a la Dirección General de Aguas; un pozo de menor tamaño tiene que estar informando una vez al mes o una vez al año, cuáles son lo que está extrayendo y tiene que tener un registro, que queda en este mismo caudalímetro, de cuánto fue lo que saco. De manera tal que las personas no puedan, por un lado, sacar

más de lo que tienen permitido y, por otro lado, que sea fácil saber, en el agregado, cuáles son las demandas que está teniendo el acuífero sobre el que todos estamos impactando.

En tercer lugar, junto con tener estos caudalímetros y esta información, hay que tener asociaciones de usuarios de aguas subterráneas, o sea, no es posible, basado solo en fiscalización estatal, determinar, en cada punto y en cada lugar, si una persona tiene un pozo que no tiene derechos o si es que está sacando más de los derechos que tiene. Lo mejor es que, al igual que con las aguas superficiales, uno tenga un conjunto de personas de la comunidad, la comunidad organizada, conozca los datos y cuide su propio recurso, por supuesto, acudiendo a la autoridad cuando alguien no cumple con lo que corresponde, al igual que en el caso de las juntas de vigilancias, la junta de canalistas, los celadores. Necesitamos lo mismo que sucede en los ríos.

Por esa razón, estamos avanzando en las organizaciones de usuarios, estamos incentivando que se creen, estamos apoyando su creación, toda vez que esta es una organización esencial para cuidar el agua.

El cuarto elemento que necesitamos para esto es la información. En los ríos es muy fácil, porque uno ve físicamente cuál es el agua; en los acuíferos la situación es muy distinta y permite todo tipo de interpretaciones. Frente a la sequía, hay gente que se acerca y dice: oiga, permita sacar más agua, porque esto es una sequía puntual; hay un montón de agua, por qué no sacamos más agua y salvamos la situación. Y otras personas que dicen: oiga, en estos momentos de sequía, esto es algo permanente, lo que está abajo se está agotando, si usted saca más, lo que va a ser es que muy pronto va a afectar el consumo humano del año que viene, de dos años más o de tres años más, y lo que usted está haciendo es agotar una fuente que cada día se achica más y que ya no queda.

Entonces, lo que hay que tener es mucha información sobre el tamaño del acuífero; qué es lo que está entrando y qué es

lo que está saliendo; cómo se relaciona el agua superficial con el agua subterránea. Y ese modelamiento es lo que se llama planes estratégicos de cuenca. El agua hay que mirarlo por cuenca. Por ejemplo, el agua de Antofagasta no sirve para Aysén y la de Aysén no sirve para Arica, son completamente separadas; hay que mirarlas por cuenca. Pero el agua superficial de una cuenca y el agua subterránea de una cuenca están estrechamente relacionadas. El agua de arriba infiltra, el agua que sacamos de abajo ayuda a compensar la falta de agua superficial.

Por lo tanto, los planes estratégicos de cuenca son muy importantes. Hemos partido por las 10 cuencas más críticas, que las vamos a tener en un par de meses, ya tenemos los primeros resultados... Y luego seguimos con otras 10; la idea del gobierno es terminar con 40. En Chile tenemos 131, pero con eso vamos a ver cubierto las más relevantes de todas, y eso nos va a permitir tomar decisiones con información. Hoy se toman decisiones con poca información. No es que no haya, hay pozos que verifican qué está pasando con los acuíferos; hay alguna información, pero la información no es la que uno quisiera tener y, por lo tanto, lo que se hace es detener la entrega de derechos en aquellas cuencas que se estiman que están agotadas y dar derechos provisorios, es decir, declarar la cuenca restringida cuando la información es dudosa.

Por lo tanto, se entregan derechos que se pueden sacar sin ningún problema, excepto que se declare emergencia hídrica, caso en el cual, esos derechos no valen y no pueden sacar.

Entonces, necesitamos más información para tomar mejores decisiones; necesitamos que tengan que ver con estos planes estratégicos, que están avanzando muy rápidamente; necesitamos también fiscalización, la fiscalización que pasa con medir con estos caudalímetros qué es lo que está sacando cada uno. Y, en tercer lugar, tenemos que compartir esa tarea entre el Estado y los usuarios, la propia comunidad del lugar, de colaborar en cuidar este recurso tan valioso.

Un aspecto adicional en momentos de sequía tiene que ver con los acuerdos de uso del agua escaza en los lugares en donde hay emergencia hídrica, y por eso hemos trabajado con las juntas de vigilancia del Aconcagua, en Petorca, en los ríos Chopa, Combarbalá, Cachapoal, Tinguiririca, el Mataquito, en fin, porque hay que trabajar en conjunto para distribuir, más allá de los derechos de agua, sin perjuicio de los derechos de agua, cuando el agua es escaza, hay que buscar la mejor manera de distribuir lo poco que hay, privilegiando el consumo humano, consumo ecológico y, después, de qué forma cautelar, de la mejor manera, que haya el menor daño posible en la parte productiva.

El tercer punto del Banco Mundial era mejorar los mercados de agua, que tiene que ver con tener mejor información.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Sobre el punto, tiene la palabra el diputado Issa Kort.

El señor **KORT**.- Señorita Presidenta, la parte de distribución o administración del agua, particularmente considerando el consumo. Entre Doñihue y Coltauco, y se lo agradezco al ministro -quizá podrías referirse un poco más en detalle-, se está inyectando agua de canal a pozos para que, a su vez, alimenten otros pozos subterráneos; o sea, hay una forma de redistribuir agua que se pierde, muchas veces, por canales o desagües, y que va destinada solo al río para que se vaya al mar, cuando se puede alimentar obras subterráneas. Hay una serie de ríos o de acuíferos subterráneos que son bien importantes.

Ministro, no sé si al respecto ya tienen algún tipo de resultado, porque esta era una prueba que estaban haciendo, y si puede tener resultados concretos en temas de consumo de agua, pensando en los pozos que, a veces, no se pueden profundizar, porque están en pleno uso, y se pueden alimentar a través de este régimen subterráneo de acuíferos.

En segundo lugar, saber si ustedes, por ejemplo, a través del fondo de infraestructura, están evaluando desalar agua, pero para riego de sectores del secano costero, que es mucho

menos caro que elevarlos hasta los valles centrales o, incluso, la precordillera.

¿Por qué se lo digo? Porque, finalmente, nosotros tenemos una estructura como Estado, que fue una política que se creó en el gobierno anterior, de este fondo de infraestructura que busca hacer, en palabras resumidas, como una Corfo de obras públicas.

En ese sentido, quiero saber si existe algún trabajo al respecto, porque nos permitirá priorizar el agua dulce que tenemos desde los valles bajándose al mar de manera mucho más estratégica en consumo humano y no disminuir las zonas de riego, a través de agua desalada.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Tiene la palabra, señor ministro.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señorita Presidenta, la infiltración es una tecnología que está en pleno uso en otras partes del mundo y por lo tanto no hay ninguna duda de que aquí también va a servir.

Es una tecnología nueva para nosotros, pero existe en el mundo y está plenamente probada.

Por lo tanto, lo que estamos haciendo en el experimento, llamémosle, la prueba en Coltauco y, también, una obra bastante más grande del Aconcagua que vamos a iniciar y que vamos a hacer nosotros, porque lo de Coltauco lo hace el Ministerio de Agricultura, son pilotos para aprender, porque lo importante es la eficiencia con la que esto se haga.

Esos sistemas de infiltración acumulan barro, las impurezas del agua van sellando el piso, entonces, hay que aprender en qué lugares, en qué forma, con qué sistemas de limpieza, con qué cuidado, cómo se hace, de manera tal de hacerlo de una forma eficiente, pero sin duda van ayudar.

Después, hay que buscar cuál es la forma en que se hace, porque hay una persona que toma el agua, la infiltra y toma los costos de eso, que puede ser el Estado o un privado, pero se benefician todos.

Entonces, cómo se hace para que quienes quieran hacer eso, que sin duda tiene un beneficio y es positivo, tengan el incentivo de querer apropiarse de una parte o de una parte relevante de los beneficios de lo que está haciendo. Incluso, si lo hace el Estado, para que apoye a quienes quiere apoyar realmente. Cómo lo hace para que aumente el acuífero para todos.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ministro, lo último.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- A mí me queda mucho, por si acaso.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Por ejemplo, en el caso de la Región de Atacama, la cuenca del río Copiapó específicamente, a propósito de lo que usted mencionó, habría una contradicción, porque en estricto rigor hay un embalse en Lautaro y ese tranque tiene muchos problemas técnicos, mucha filtración que se genera a lo largo del año.

En su minuto, se habló del tranque Lautaro 2.0, impermeabilizar el tranque como un tranque dentro del otro para poder evitar esta infiltración, pero el problema es que hubo algunos opositores, estamos hablando de algunos agricultores pequeños, porque como existe esta infiltración hace muchos años, ¿cuál es el daño que este podría generar?

¿Existen herramientas técnicas para hacer una evaluación de dónde se van esas aguas? ¿Se puede hacer eso?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Sí, claro. Está aquí el director de la DOH que podría hablar más en detalle y, particularmente, respecto de Lautaro.

Efectivamente no solamente en los embalses, después el director puede referirse al caso particular, pero sucede lo que usted señala, lo veíamos recién con los canales de regadío, pasa con estas grandes obras de riego y las personas que se ven beneficiadas, porque no es que hayan tenido esos derrames o esas infiltraciones, sino cuando se hizo esta tremenda obra, el que estaba cerca y le tocó justo que la

infiltración iba hacia allá, durante un tiempo, ha estado recibiendo eso y después dice: "Oiga, si lo recubre, el que va a perder eso soy yo."

Ahora, hay una parte que lo recibe ese señor, pero hay una parte que se pierde y que termina quizá en qué parte.

Entonces, hay que hacer un cálculo y esto pasa en muchas partes.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- ¿Qué es lo que se hace ahí?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Se hace, como dije, este análisis de cuáles van a ser los costos, cuáles van a ser los beneficios, pero, en general, prevalece la idea de volver a tener esta obra, que sirva para quienes se determinó desde hace ya mucho tiempo, que necesitaban regar y se hizo una inversión que se está perdiendo, porque no llega a donde tenía que llegar, sino se desperdicia una parte y otra puede que lateralmente le llegue a alguien, pero la mayor parte se desperdicia. Pero lo que se hace es, precisamente, tratar de ver cuáles son los impactos.

Respecto de la desalinización para el uso en la agricultura, estamos trabajando en la Comisión Nacional del Agua y hay que llegar al final a tener una idea de lo que es como el plan de obras. No quiere decir que se vaya a hacer eso exactamente, pero como una idea de qué tipo de obras se van a hacer en el mediano y largo plazo en Chile, de manera tal de ir incentivando eso un poco como lo que tenemos en carreteras, en aeropuertos, una cierta indicación de para dónde va la cosa.

No hemos terminado eso, pero doy mi opinión personal. Mi opinión es que la desalinización es una tecnología vital, tanto así que creo que es vital cómo resulte la ley de desalinización que está en el Congreso, porque hoy día no existe una fuente alternativa razonable para proveer agua, por ejemplo, a todas las ciudades del norte, si no existiera la desalinización.

La fuente para un lugar que es completamente desértico y donde las poblaciones grandes están en la costa es, por definición, la desalinización.

De la misma manera, la minería, que tiene un lugar fijo, porque no puede moverse, tiene que estar donde está el yacimiento, y que está en esos lugares, a pesar de que tiene que subir a la cordillera, porque en general están alto, hoy en día crecientemente su mejor alternativa es agua de mar desalinizada o, simplemente, directamente el agua de mar; o sea, hay algunas de las obras, las mineras nuevas, simplemente están construyendo la planta para poder utilizar directamente el agua del mar, sin necesidad de desalinizar. Pero cualquiera sea la alternativa es tomar agua del mar y usarla en ese uso.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ministro, pero lo que no puede pasar es el caso de lo que en algún minuto conversamos. En Atacama, se está haciendo una planta de desalinización, en que un alto porcentaje si no el total de la construcción fue a costa de recursos del Estado y la va a administrar, en este caso, la empresa encargada de los servicios sanitarios en Atacama, y el costo se va a traducir en la tarifa que van a tener que asumir los atacameños.

Entonces, si eso es un modelo a replicar en el futuro en el país, cabe considerar que es un tema que por lo menos se cuestiona, porque en estricto rigor es cargar la mano una vez más a los consumidores, siendo que el que tuvo la responsabilidad de no haber administrado bien los recursos es el Estado, porque creo que algo que podemos tener claro, a propósito de todo lo que usted nos ha expuesto, es que hay una debilidad brutal en la administración de los recursos, porque no se tiene toda la información, que es clave.

Entonces, es una situación bastante compleja que eventualmente podría darse en la Región de Atacama: el aumento de la tarifa.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Sí, pero voy inmediatamente a su observación.

Justo llegó el diputado Barros y ya le contesté sus preguntas, pero después se las cuento en detalle.

En lo que refiere a terminar con el tema de la desalinización y la agricultura, primero, el costo de la desalinización hoy día es alto; o sea, estamos hablando en promedio de 1 dólar por metro cúbico. Un dólar por metro cúbico significa 2 o 3 millones de pesos por hectárea para regar en la agricultura al año, sin tener que llevarla. Si además tengo que llevarla a una zona lejana, debo agregar el costo de la energía para llegar, y si está en altura, olvidémonos de eso.

Para la minería, por ejemplo, para dar una idea, tiene un dólar de costo producir el agua desalinizada y 5 dólares llegar a la mina. O sea, el costo de transporte para llegar a 3.000 metros, y 200 o 300 kilómetros de distancia, es gigante, mucho más que la desalinización. Aquí es puro costo de la energía.

Ahora, todo es cambiante, porque el costo de la tecnología va cayendo. El costo de la energía en Chile ha caído mucho. O sea, esto que estamos hablando es posible porque hoy el costo de la energía en Chile es un tercio de lo que era antes. Sacar agua de mar y convertirla en agua desalinizada es pura energía.

Con excepción de casos particulares, ayer, por ejemplo, hubo un muy interesante programa en Canal 13 sobre la desalinización, donde mostraban cultivos hidropónicos en Antofagasta para vender en dicha ciudad, un lugar que está lejos por el costo de transporte. Pero obviamente esa lechuga será más cara que una plantada en Coltauco, porque incide el costo de producción. Además, la agricultura se puede mover.

Siempre hay salvedades y puede haber un producto, o una cosa muy particular, una situación en que la comunidad está totalmente aislada de otras cosas, donde el costo de transporte es muy grande, donde hay un producto que se da

justo con ese clima, donde se justifique porque no hay otra alternativa.

Pero en lo general pretender que uno va a tener un desarrollo agrícola basado en la desalinización hoy día... Y queda largo trecho para que sea diferente, porque las diferencias todavía son muy grandes y en la agricultura compiten los productos. Por lo tanto, se irá moviendo, y de hecho se está moviendo hacia los lugares donde tiene un costo de producto más barato. Con ese costo de agua es muy difícil.

Esto me lleva a la pregunta que hacía la Presidenta. En Chile el costo de la producción del agua es pagado por los usuarios, con excepción del subsidio del agua potable que existe para los sectores de menores ingresos, y eso es general para todos, y con excepción de los APR, donde el Estado subsidia la inversión y la gente paga básicamente la operación. O sea, no se les cobra a las comunidades lo que cuesta hacer el sistema, sino que este se entrega y después se le va cobrando a la gente lo que se necesita para operar el sistema.

En el caso de Atacama, como usted señala, la planta fue financiada completamente por el Estado. O sea, se parecería como al sistema de financiamiento de un APR. Toda la inversión es financiada por el Estado. Pero los costos de operación son muy altos, porque requiere un uso enorme de energía. Los costos de operación del personal, energía, materiales, etcétera, corresponden a los usuarios de esa agua, que en este caso son las personas de cuatro ciudades en Atacama.

El valor de aumento de la tarifa solo paga eso. Si tuviera que pagar el valor de la planta subiría muchísimo más. Esto es sin perjuicio de qué va a pasar finalmente, porque también esto genera oportunidades dentro de otras cosas, que ya reveremos en qué van a terminar. Por el momento, ese evento no se ha producido.

Independientemente de eso, el hecho de que el Estado haya decidido poner esa planta y no cobrar, significa un enorme

apoyo al consumo de agua potable en la Región de Atacama en sus cuatro principales ciudades, las cuales serán abastecidas por ese sistema. Si no fuese así, tendríamos que estar hablando de un eventual aumento de tarifa muchísimo más alto, porque debería pagar la operación más toda la inversión.

Entonces, no se contraponen ambas cosas. La gente dice "por qué si el Estado pagó la planta", eso quiere decir que porque pagó la planta, la tarifa solo sube en el costo de operación.

El tercer punto que mencionaba el Banco Mundial -sigo contestando al diputado Gahona-

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Él tuvo que ir a votar a la Comisión de Salud.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Ustedes le cuentan. Mencionaba que había que mejorar los mercados de agua.

Básicamente, eso tiene que ver con información. Hoy se ha avanzado bastante en eso, pero queda mucho también. Por ejemplo, se acaban de dar los balances hídricos norte, sur y centro del país, que no se hacían hace muchos años; se presentó el nuevo catastro de glaciares, que tiene mucha relación con el abastecimiento de agua, y fundamentalmente lo que ya mencioné sobre el Plan Estratégico por Cuenca.

El cuarto punto tiene que ver con la gestión del agua subterránea más sostenible. Este punto se discute poco, pero según el Informe del Banco Mundial, en el cual coincidimos totalmente, este es un cambio muy grande de lo que ha sucedido. Todo el sistema está hecho para aguas superficiales. Los conceptos son los mismos y se pueden aplicar los mismos, pero hay que crear los elementos necesarios para que se pueda aplicar.

Por eso, en esto el gran avance ha sido la Ley N° 21.064, promulgada en enero de 2018. Comenzó a aplicarse. Se dictaron para 68 comunas, porque el reglamento establece que se va haciendo parcializado.

En 2019 partimos con 60 y ya llevamos 68, por lo que en 2021 esperamos terminar con 180 comunas en total. Lo estamos

haciendo con las comunas con más complicaciones y más agrícolas. Por ejemplo, la primera de todas fue Petorca. En dicha comuna se debiera empezar a hacer exigible esto, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Más o menos a mediados de año los pozos deberían empezar a tener los caudalímetros para informar y el sistema comenzara a funcionar. Esto va a tomar un tiempo, pero esta ley es fundamental y cambia radicalmente cómo se hace esto.

Sobre los planes estratégicos de cuencas, ya me referí a ello. Tenemos 10 prácticamente listos y estamos contratando otros 10. Esperamos terminar a fines de 2021 y principios de 2022 con 40, que son las principales cuencas del país.

En cuanto al punto 5, respecto del Banco Mundial, es profundizar las medidas ya tomadas para asegurar la calidad del agua. Esto no tiene mucha relación con el Ministerio de Obras Públicas. Al respecto, ya tenemos normas secundarias de calidad del agua en varias partes, para la bahía de Quintero y los ríos Huasco, Rapel, Aconcagua, Valdivia, etcétera. Desde antes estaban los ríos Maipo y Biobío y los lagos Serrano, Villarrica y Llanquihue. Hay un avance importante, pero tendrían que ir al tema de medio ambiente o salud.

El punto 6 tiene que ver con fortalecer la Dirección General de Aguas en materia de autoridad, autonomía, presencia local, presupuesto, etcétera. En ese sentido, la misma ley que mencioné antes cambió radicalmente las capacidades para fiscalizar, porque aumentó las multas por 100. La máxima multa que se podía cobrar eran 20 UTM, pero hoy se pueden cobrar hasta 2.000 UTM. Eso es para dar una idea de cómo se aumentaron los rangos de multas que se pueden hacer.

A fines de 2019 se creó en la DGA la Unidad Tecnológica de Fiscalización, que incluye imágenes satelitales y drones. Para dar una idea, la DGA tiene 7 fiscalizadores. Nosotros estamos incorporando 20 adicionales ahora.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- ¿A nivel nacional?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Sí. Aún así son poquísimos, particularmente cuando se produce una situación como esta. Pero cuando la situación es normal no hay ningún problema o es muy poco y es lo regular. En situaciones como esta, debe tener la capacidad de crecer.

El séptimo punto tiene que ver con fortalecer las organizaciones de usuarios de agua y las juntas de vigilancia, y revisar los roles y responsabilidades.

Como mencioné, la prioridad está en crear las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas. Ahí es donde tenemos la mayor carencia. Los ríos en Chile, prácticamente todos, tienen juntas de vigilancia y asociaciones de canalistas y sus procedimientos, divisiones y sus cuidados establecidos.

Estamos completamente al debe en lo que tiene que ver con aguas subterráneas. Incluso, el gobierno va a presentar un proyecto de ley sobre organizaciones de usuarios de aguas subterráneas que apunte precisamente a ese tema, y cómo ayudar a que se formen, cómo proteger a los pequeños dentro de estas organizaciones, cómo simplificar la constitución de organizaciones de usuarios, en fin.

En el octavo punto, el Banco Mundial tiene que ver con mejorar la coordinación inter e intrasectorial en la gestión de las cuencas. Como mencioné, se ha hecho una serie de cosas en relación con las cuencas, que es el elemento central para administrar esto. Este gobierno hizo una indicación al Código de Aguas para crear una instancia de coordinación interministerial, la mesa nacional del agua, que debe apuntar precisamente al tema de la institucionalidad.

Es un tema que se ha extendido por mucho tiempo en Chile y que ha sido reconocido por muchos, que tiene que ver con que existen muchas instituciones que intervienen en el tema del agua, más de 40 -creo que el Banco Mundial dice que son 41-, y todas tienen algo que decir respecto en ese ámbito, pero no existe una organización ni alguien que coordine realmente todo eso y tenga la autoridad última respecto de ese tema.

Ahí existen dos alternativas principales. Una de ellas es la creación de una subsecretaría del agua, que dependería del Ministerio de Obras Públicas y tomaría a su cargo los servicios que hoy tiene el ministerio, y la otra es la creación de una agencia nacional del agua, como la que tienen otros países.

Cada una de ellas tiene pros y contras, pero hay que tomar decisiones y avanzar en eso, porque hoy, con la dispersión que existe en ese ámbito, naturalmente que se hace más difícil.

El punto nueve del Banco Mundial se refería precisamente a la elaboración de planes de gestión de cuencas. Como dije, en 2020 tendremos los primeros 20 -10 que ya están y 10 más que tendremos a fines de año-, en 2021 tendremos 10 más y licitaremos 10 adicionales, con lo cual completaremos 40.

Es difícil explicar cuán necesario son. Hoy, la discusión entre personas que tienen distintas visiones de lo que está pasando con el agua en una determinada cuenca, se basa en información incompleta y en apreciaciones, de tal forma que, mientras una persona puede sostener que el agua sobra y decir: "Póngale nomás", otro podría afirmar perfectamente: "Mire, el agua se está acabando y hay que reducir el consumo; redúzcalo desde ya, porque de otra forma se va a afectar el consumo humano". Ambas posiciones se pueden sostener con poca información, y eso hay que resolverlo.

El punto diez es mejorar la resolución de conflictos. Nosotros hicimos una indicación al Código de Aguas para la creación del panel técnico, para fortalecer la toma de decisiones en todos los aspectos.

Finalmente, el Banco Mundial hace referencia a mejorar los sistemas de información. Ya mencioné muchos de los temas en materia de información en los que se ha avanzado bastante en el último tiempo.

Eso es lo que puedo responder a la pregunta formulada por el diputado Gahona.

La segunda pregunta del señor Gahona era si había innovación en los sistemas de agua potable y qué ha pasado en aquellos lugares semiconcentrados, donde existen dificultades para acceder a fuentes nuevas.

En relación con eso, hemos usado diferentes métodos. El mayor problema que existe en el caso del agua potable rural es que los sistemas de APR existentes fueron construidos con pozos con poca profundidad, en general de 20 metros o de 30 metros, y algunos hasta de 15 metros, de modo que, cuando se presenta un problema, el primero que pierde el abastecimiento de agua es el sistema de APR. Entonces, la profundización de los pozos es una de las primeras soluciones a abordar.

En segundo lugar, si eso no funciona, se deberían explorar otras fuentes, otros lugares donde perforar y obtener aguas subterráneas para proveer a los APR.

La tercera tiene que ver con otras fuentes. Debido a la emergencia, hoy estamos usando pozos pertenecientes al sector público. El Ejército, el Minvu y el Ministerio de Obras Públicas tienen pozos, en distintos lugares. Si bien su uso final no es para esto, dada la emergencia, también los estamos usando.

También existen personas particulares dispuestas a entregar esa agua.

Un sistema que ha sido bastante usado, y que creo que va a ser usado de manera creciente, tiene que ver con la interconexión con las empresas sanitarias, que a veces tienen abastecimiento de agua cercano. Eso es muy válido para lugares rurales, pero cercanos a las ciudades. Entonces, lo que se hace -esto, por supuesto, con la aceptación del APR como una alternativa- es que se entrega no solo abastecimiento de agua, sino simplemente seguridad hídrica. Lo que se hace es tender una cañería desde la sanitaria hasta el pozo del APR, de manera que, si llegasen a tener escasez de agua, podrían usarla y simplemente cancelar la que ocuparan.

En casos muy particulares, en lugares costeros muy apartados que no tienen posibilidad de ser conectados a ninguna red a causa de su condición rural, se ha instalado pequeñas plantas desalinizadoras para alimentar un APR. Tengo una lista en alguno de los anexos, pero, como digo, son muy pequeñas, pero importantes.

Por ejemplo, alguien preguntó por el caso de Coquimbo, donde existen 19 APR conectados a una sanitaria. En el caso de Esva, actualmente tenemos 13 y estamos viendo otros 27. Podrían llegar a 40 conectados a Esva, como una alternativa para proveer agua de esa forma o solamente como una medida de seguridad.

La tercera pregunta del diputado fue: Cuando un sistema de APR se conecta a una sanitaria, ¿qué ocurre con sus pozos?, ¿qué posibilidad hay de que esos sistemas de APR se conecten a la red de servicios sanitarios y al alcantarillado?, ¿qué ocurre en la Región de Coquimbo en esa materia?

En relación con ello, ya di los datos de Coquimbo. Cuando una sanitaria se conecta con su pozo no sucede nada, es decir, simplemente es una fuente de agua adicional que se ocupa siempre y cuando sea necesaria, y siempre que a las personas les convenga la relación costo-beneficio. Supongo que, dado que estábamos hablando de Coquimbo, se refería al problema que hubo con Sendos (Servicio Nacional de Obras Sanitarias), Econssa (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.) y la situación bien particular que hay allí.

Efectivamente, cuando Sendos fue dividido tenía algunos pozos rurales que después, cuando se transformó en empresa sanitaria, no fueron a las sanitarias, sino que se quedaron en Econssa. Por lo tanto, actualmente se da la situación de un pozo que abastece un APR pero sin que este le pertenezca, ya que pertenece a Econssa, una empresa estatal.

En consecuencia, en la actualidad estamos revisando la situación de cada uno de esos pozos, para donarlos a cada uno de los APR.

El señor **GAHONA**.- Señorita Presidenta, ¿me concede una interrupción?

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Tiene la palabra, diputado.

El señor **GAHONA**.- Señorita Presidenta, le informo que me ausenté debido a que también formo parte de la Comisión de Salud y debí concurrir para intervenir en una votación.

Respecto de...

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Diputado, ¿le parece que dejemos que el ministro termine? Se lo planteo porque ya hemos hecho varias interrupciones, lo cual ha hecho demorar su exposición, y nos quedan 40 minutos de sesión.

El señor **GAHONA**.- De acuerdo, señorita Presidenta.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señorita Presidenta, la siguiente pregunta del diputado Gahona estaba referida al problema presupuestario para realizar estudios. Él preguntó si el MOP ha avalado la posibilidad de suscribir convenios a través de la Comisión Nacional de Riego y de los gobiernos regionales.

Le respondo que tenemos convenios con muchísimos. En la actualidad tenemos 97.500 millones de pesos vigentes en convenios. El mayor de todos es en la Región del Maule, con 30.000 millones.

Estos son los convenios de financiamiento vigentes que tiene la DOH con distintos gobiernos regionales.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- ¿Eso también lo hará llegar a todos los diputados?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Exacto, se lo puedo mandar en formato digital.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ministro, en algún momento usted entregó información sobre los APR.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Sí, también la voy a entregar, tengo todo aquí.

La siguiente pregunta tiene que ver con una gran pérdida en los embalses por problemas en la conducción del agua, que fue la pregunta que hizo la Presidenta, dice: en relación con la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el presupuesto que se asigne para enfrentar estos problemas, son mínimos e insuficientes, lo mismo en cuanto a riego tecnificado, falta avanzar en hechos.

Bueno, respecto de esta materia, quiero decir que lo que se está invirtiendo en materia de riego tecnificado es más de lo que se ha invertido nunca, aunque siempre puede ser insuficiente, pero comparativamente es lo más amplio. Había un presupuesto 67.000 millones, que ya era el más alto, y ahora se agregaron otros 10.000 millones. Eso, por parte de la Comisión Nacional de Riego (CNR). Y por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), también tiene recursos para hacer obras de riego. De tal manera, eso está avanzando.

Si bien siempre hay restricción de recursos, hoy, más que restricción de recursos, hay restricción de velocidad. O sea, cómo cumplir con todos los requisitos para poder abastecer tantas emergencias que se producen al mismo tiempo, porque ya no estamos solo en el desarrollo de obras, sino que estamos, al mismo tiempo, atacando emergencias.

La siguiente pregunta tenía que ver con que falta avanzar en regularización de derechos de agua desde las organizaciones del Agua Potable Rural (APR). Eso ya lo mencionamos. Solo quiero mencionar que hemos hecho estos estudios y aquí tengo el listado de los estudios, de lo que se requiere hoy en día y lo que se proyecta para 2030 y 2040. Y lo que estamos haciendo es, justamente, ir entregando los derechos a cada uno de los que lo necesitan, a los que les falta. La idea es que todo APR tenga los derechos de agua que le corresponden, de acuerdo con la necesidad de agua que tienen. Debo decir que, el no tener, en nada influye en no sacar agua. Hoy día sacan agua, incluso en la emergencia están específicamente excluidos y pueden sacar agua sin tener derechos. De tal manera, no está afectando eso. Se trata,

simplemente, de regularizar esta situación y, además, calzar bien los usos que tiene cada una de las cuencas y no decir: bueno, estos son los derechos, en circunstancias que, en realidad, se está sacando más por este costado. O sea, si hay que dar agua para eso, el derecho debe acotarse en alguna otra parte para poder darla.

El diputado Gahona encontraba que se estarían instalando excesivas plantas desaladoras en el borde costero y señaló que el Ministerio de Obras Públicas podría tener un rol mucho más articulador -entiendo- en la ubicación de las plantas.

Al respecto, la ubicación de una planta o de cualquier cosa en el borde costero no le pertenece al MOP, sino al Ministerio de Defensa a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar). Son ellos los que deciden cómo usan el borde costero y dónde puede haber una cañería. De hecho, en la legislación que se está viendo sobre esta materia lo que decimos es que tenga, además, la posibilidad de decir, sean varias plantas, o una o lo que sea: todas las cañerías las quiero por aquí, no quiero que me eche a perder una playa. Hablamos de una cañería chica, pero que tiene un impacto visual, que puede echar a perder algo o que requiera de cuidado especial.

Respecto del impacto en el medio ambiente, si bien, en términos del total, va a ser igual si hay varias plantas o una sola, el que debe hacer los estudios es Medio Ambiente; todas estas plantas tienen estudio de impacto ambiental y deben cumplir con las normas.

En lo que se refiere al ministerio, lo que nosotros sí podemos hacer es concesionar o recibir, como iniciativa de interés público, plantas desalinizadoras, sea para consumo humano -porque tenemos como función, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el consumo humano- sea para obras de riego o para agua potable rural. No podríamos hacerlo para la minería, porque no es función del ministerio y no tenemos atribuciones para hacer plantas para la minería.

Entonces, estamos en las dos cosas, tenemos plantas estatales, como el caso que mencionaba de Atacama; tenemos plantas a través de concesiones, como el caso de las sanitarias, que tienen una planta desalinizadora, y tenemos iniciativas privadas de interés público, como la que se acaba de presentar en Coquimbo. O sea, están abiertas todas las posibilidades; esto tiene economías de escala, es decir, es posible que esto comience a cambiar y comiencen a juntarse varios demandantes para tener una sola planta, pero, hasta ahora, no es lo que ha sucedido. Hoy día, la seguridad de abastecimiento se ha privilegiado respecto del beneficio del costo de tamaño, pero está empezando a cambiar.

Actualmente, las empresas sanitarias pueden hacer una planta desalinizadora para proveer a Antofagasta, puede tener una cantidad adicional que le puede vender a un tercero, y ese tercero puede ser un uso industrial, agrícola, minero o lo que sea. En el fondo, le permite tener un beneficio y le permite también compartir ese beneficio con los usuarios del agua potable. Eso está empezando a cambiar. Hay algunas mineras más pequeñas... Actualmente, todas las mineras que tienen plantas y todo lo que se está construyendo -hoy tenemos 5,6 metros cúbicos por segundo instalado- están con proyectos por más del doble de eso. O sea, la capacidad de desalinización del país, probablemente, en un muy breve tiempo, se va a multiplicar por tres.

Esas plantas, en general, son muy grandes y la mayor parte de la capacidad proviene de plantas muy grandes, por lo de los beneficios de economías de escala. Pero ahora están apareciendo mineras más pequeñas, a las que les conviene juntarse dos, tres o cuatro. Las otras ya tienen esa economía de escala, porque son plantas grandes. Por ejemplo, Codelco, está haciendo una planta para ellos, ya tiene una economía de escala suficiente para tener un costo razonable, pero otras mineras más pequeñas lo necesitan.

Paso a responder las preguntas de la diputada señora Joanna Pérez. Seré rápido en esto. La diputada dijo que quiere

conocer el informe de la comisión asesora presidencial del gobierno anterior, presidida por el señor Reinaldo Ruiz, quien trabajó entre abril de 2014 y noviembre 2016 y que fue nombrado delegado presidencial, y las medidas que se han adoptado. Dije que seré rápido, porque son prácticamente las mismas cosas del Banco Mundial y ya fui muy extenso en esa materia, así que voy a pasar sobre esto, siempre que no haya nada en particular.

Quiero mencionar que, aparte de todas las cosas que ya mencioné, él también ponía énfasis en que era importante fortalecer la capacitación de las personas que manejan los programas de APR. Voy a dejar el detalle del trabajo que hacemos con ellos, los talleres que se realizan. En el documento también figuran las plantas desalinizadoras que hay en el sector rural y los talleres que desarrollamos con las comunidades.

En la segunda pregunta, se me pidió que entregara el programa 2018-2022 en materia de obras de infraestructura, embalses y APR en cada una de las regiones.

Entonces, más que nombrarlos, hago entrega del listado del total, por región, de cada uno de los sistemas de Agua Potable Rural que se van a construir y de los que se van a ampliar. En la misma página, en la última parte, viene una cosa que no tiene que ver con eso, que son las empresas sanitarias que están conectadas en la región de Coquimbo. Pero en esta página está el detalle de lo que usted preguntó, señora Presidenta.

Eso, en cuanto a los APR.

En la parte de los embalses, nosotros tenemos 26 embalses priorizados. De esos 26, hay cuatro que tienen avances: Valle Hermoso, Punilla, Chironta y Las Palmas. Esto significa que hoy estamos trabajando en cuatro embalses distintos.

El promedio de embalses que se ha hecho en Chile, en cada gobierno, es de 1,5, lo que muestra una vez más la dificultad de hacer embalses.

Este plan de todos estos embalses, si se pudieran hacer todos ellos, significa aumentar la superficie de riego y la capacidad de embalse en un 50 por ciento, que es un monto realmente relevante.

El tercer punto que se mencionó dice que se propone incorporar a los intendentes en la mesa intersectorial que se está organizando. Respecto de eso, precisamente lo que estamos haciendo es que todas las mesas sectoriales están presididas por los intendentes; tenemos una en cada región de las que están en emergencia. No es mucho más lo que puedo decir sobre eso.

Luego se hizo referencia a que en la Región del Biobío se financiaron más de 5.000 millones para recuperar los cuerpos lacustres de los lagos Lanalhue y Lleulleu. Eso en realidad es una tarea que es parte del programa de recuperación de los servicios ambientales de los ecosistemas de la provincia de Arauco, que es un tema en realidad que trabaja en FNDR de Biobío con el Ministerio de Medio Ambiente.

En todo caso, efectivamente ahí hay 4.600, casi 5.000 millones que están trabajando en eso, no solamente en los lagos Lanalhue y Lleulleu, sino que en otros lagos de la región.

Lo que se pretende es tener normas secundarias de calidad de agua, que es un tema importante y que estoy seguro que va a ser de importancia hacia adelante, más que la que tiene hoy, en la medida en que vayamos avanzando y poniendo cosas más estrictas a través del tiempo.

La cuarta pregunta se refería a la actividad económica de cada una de las regiones, y si se ha conversado con la industria forestal o agroindustria en relación con el impacto que generan sus actividades en la sequía y en la escasez hídrica.

Al respecto, la tarea que estamos haciendo y que desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, tiene que ver con la idea nuestra de que todos debemos hacer un uso responsable del agua, y esto tiene que ver con usar

menos agua en todas las cosas que estamos haciendo, particularmente en este período de emergencia y en las 6 regiones que están en emergencia.

Por esa razón, en el caso de la agricultura, más que en el caso forestal, porque en este no ocupa agua de riego, sino agua de lluvia, ahora, sin perjuicio de ello, el uso del agua en la agricultura -y lo demuestra muy bien lo que sucede en Atacama- se puede tecnificar y se puede ser mucho más eficiente que lo que es hoy, y ese es un proceso que está avanzando y por esa razón, ya lo mencioné, tenemos un presupuesto que es el mayor que ha habido en materia de concursos para subsidios al riego de los agricultores pequeños.

Al respecto, es importante que los agricultores más grandes sigan haciendo esto. Y, tal como lo he planteado, en las regiones más al norte, y recuerdo haber ido a la mesa del agua de Copiapó, ahí es el único lugar donde me he encontrado que los agricultores me dijeron que ellos estaban preparados para eso porque estaban preparados desde hace muchos años; que tenían tecnificado todo. Es más, todas las cosas que nosotros hablábamos ellos ya lo tenían y se habían organizado entre ellos y estaban muy preparados para esto.

Bueno, esa misma realidad es la que tenemos que ir logrando en el resto del país. Por lo tanto, estoy seguro que la tecnificación va a seguir, va a haber mucha más eficiencia en el riego, va a haber organizaciones de usuarios mucho más fuertes y poderosas, no solamente de aguas superficiales, sino también de aguas subterráneas.

En el tema del agua de las ciudades, estamos con una campaña que busca que las personas también sean responsables en su uso, para que hagan todo lo que quieran, pero tratando de no malgastar. Por ejemplo, si vamos a regar el jardín, hagámoslo de día; si una municipalidad tiene un parque, si se puede hacer el mismo con cosas que ocupen menos agua, las municipalidades grandes son las principales usuarias de agua. En esto quiero decir que hay números que se usan, pero que no

necesariamente son correctos. Por ejemplo, se dice que el consumo es de solo el 5 por ciento, pero cuando uno mira la cuenca del Maipo, ello significa que Santiago es del 30 por ciento, y en época de sequía puede ser del 50 por ciento. De hecho, nosotros ya estamos usando una parte del agua de la agricultura desde principio de temporada, que se trasladó a la ciudad. Hoy los agricultores de la zona metropolitana están con el problema de la sequía y, además, con una cantidad de agua que se destinó al consumo de la ciudad para evitar tener problemas de abastecimiento.

Entonces, en la cuenca del Maipo, como podría ser en otra, el uso realmente importante hoy es no solo el agrícola, también el consumo es muy relevante.

En el caso de otras regiones en el norte, el consumo de agua de la minería es sumamente importante. Las plantas desaladoras de la minería son mucho más grandes que las de las ciudades.

Entonces, en cada cuenca hay que ver cada caso, pero el llamado a ser responsables en el uso del agua es para todos.

Aquí hay cosas que se pueden hacer. Se puede reusar el agua. Algunas de las preguntas hablaban del tema de las aguas grises. Ojalá las casas hubieran estado mejor preparadas desde antes para poder dividir esas aguas, de las aguas servidas o aguas negras, pero ahí hay cosas que se pueden hacer.

Respecto de la desalinización, hoy tenemos del orden de 8 metros cúbicos por segundo, particularmente en Valparaíso y Coquimbo, que van al mar, es decir, que todavía tenemos emisarios submarinos que van con tratamiento primario solamente, pero se les podría hacer tratamiento secundario y podrían utilizarse en la medida que el precio del costo y el valor del agua siga subiendo y siga siendo escaso, ese proceso empezará a utilizarse porque es un recurso que está ahí y no deja de ser importante.

Otra de las preguntas se refería a qué va a pasar sobre los remates de los derechos de agua no consuntivos y cómo va a

afectar a futuro a las comunidades mapuches. En esto, más que ir al caso particular, porque este es un caso general; y hoy ocurre en el Maule, hace pocos días fue en Ñuble, por lo tanto, quiero aprovechar la oportunidad de explicar lo que sucede en esta materia. Creo que es bueno que la comisión tenga los elementos respecto de este tema.

En primer lugar, en Chile a partir del 2005 se publicó una ley que crea las patentes por no uso. Esa ley se aplicó desde el 2007, y establece que todas las personas que tienen derechos consuntivos o no consuntivos, y que no los ocupan tienen que pagar una patente por no uso. Es decir, se decidió que el agua, que es de todos los chilenos, se le otorga a una persona porque la necesita, pero si esa persona no la ocupa, temporalmente, tiene que pagar, porque lo que queremos es un incentivo a que la persona lo ocupe o lo devuelva.

Se crearon tres tramos. Es decir, si la patente por no uso del 2007 a 2012 -porque es de 5 años- fue de 100, a partir del 2012 al 2017 fue de 200 y, del 2017 en adelante, es 400, y ahí termina.

El nuevo Código de Aguas que hoy se está tramitando en el Senado, y por indicación del gobierno, no tiene ese límite y sigue multiplicándose. O sea, sigue generando hacia arriba, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, de tal manera que la patente por no puso pasa a ser un tema muy importante para que las personas ocupen el agua o devuelvan el derecho, y creo que es bueno que ustedes sepan qué es lo que ha sucedido.

Tengo aquí lo que ha sucedido en materia de devolución de derechos de agua. Debo decir que en Chile, en 1997, y esto está en el conocimiento que tiene la gente respecto de este tema, el 80 por ciento del agua, los derechos no consuntivos, pertenecían a Endesa; el 80 por ciento de todos los derechos no consuntivos, en 1997, estaban en manos de Endesa, que venía históricamente de la empresa estatal, lo que terminó en manos de las empresas que derivaron de eso.

En los últimos años, cuando empezó este pago de patentes, la renuncia de los derechos no consuntivos, que son los que básicamente no tienen uso, porque los derechos de la agricultura tienen uso -como mencioné, en 2017 subía-, y en 2016 se devolvieron 2 millones 300 mil litros por segundo al Estado; el año 2017, se devolvieron otros 400 mil litros por segundo; el 2018, se devolvieron 4 millones 325 mil litros por segundo.

Por lo tanto, desde el 2005 hasta ahora se han devuelto 8 millones de litros por segundo no consuntivos. O sea, lo que uno tiene en mente hoy de la distribución de los derechos no consuntivos, no tienen nada que ver con lo que la gente tiene en mente.

En la lámina se aprecia la distribución de hoy. El que más tiene es la empresa Colbún, que tiene 6 por ciento; Endesa, de los 80 que tenía, tiene 5. Entre todos los más grandes, no llegan al 50 por ciento de los derechos.

En materia de distribución, la patente por no uso ha tenido un impacto enorme. En la parte de los derechos consuntivos es mucho menor, porque los derechos consuntivos la gente los ocupa. Así es que son muchos menos los que están afectos, pero solo debo mencionar que en los primeros años prácticamente no hay devoluciones; el año 2018 se devolvieron 148 mil litros por segundo.

En los derechos no consuntivos, y que son básicamente los que pagan patente por no uso, porque son los que no usan. Dicen: a lo mejor podría tener el día de mañana la posibilidad, y por último los vendo; me los quedo.

En los otros también hay, pero menos. Estamos hablando de cantidades más chicas. En general, la persona en la agricultura que tiene, lo ocupa. Estoy hablando en general, pero también hay algunos que están sujetos a patentes de no uso. Pero aun así, en el 2018 se devolvieron 148 mil litros por segundo de los consuntivos, agrícolas. Eso es lo primero.

Lo segundo, esto es lo que el Estado está recibiendo. Aparecen personas o entidades o empresas que quieren pedir

derechos de agua, porque los derechos de agua no están para que los guardemos, sino para que sean utilizados si es que hay alguna cosa útil que hacer con ellos.

Por lo tanto, la gente llega y va a pedir. En algún caso, podría haber. Esto particularmente es lo que ha sucedido. Son personas que piden derechos no consuntivos. Son pequeñas que quieren una central de paso, una cosa chica. En general, son cantidades muy pequeñas.

¿Qué establece la ley? La ley dice que si la persona lo pide, tiene que explicar para qué lo quiere. Y si están disponibles se les concede. ¿Pero qué sucede si más de una persona pide? Recuerden que la persona lo pide, hay que publicarlo, ya sea porque otro vino de *motu proprio* o ya sea porque se opone y dice que también quiere estar ahí.

Si hay oposición, si hay otra persona que lo quiere, la ley establece que hay que hacer un remate.

O sea, si hay más de una persona que pide un derecho que está disponible y que el Estado decide que es una buena idea otorgar, lo que se necesita es hacer un remate. Entonces, hoy día en el medio ambiente en que estamos no se entiende muy bien. Esta es una obligación legal.

Además, casi todos son no consuntivos. No tiene nada que ver con el problema agrícola, porque de eso no tenemos.

Lo que establece la ley es una obligación. Si más de una persona pide un derecho del que se dispone, y no hay suficiente para darle a todos, hay que hacer un remate. Ese es todo el punto que se puede hacer. Como digo, hay todo un proceso que dura años, en que se publica, la gente puede oponerse; si va a afectar a una comunidad indígena que dice que tiene derechos consuetudinarios, y si tiene derechos ancestrales puede hacerlos valer.

Si finalmente se considera que hay una cosa que se puede otorgar, y no hay suficiente, lo que se hace es ir a un remate porque así lo establece la ley.

Ahora, me voy a referir a la pregunta de la diputada señora Marcela Hernando, quien me pregunta sobre el tema de los

servicios no regulados en las empresas sanitarias. Es distinto a lo que hemos hablado anteriormente y es bueno clarificarlo. Ella se refiere específicamente al caso de Antofagasta, pero es válido para cualquiera.

La pregunta se refiere al servicio no regulado de las empresas. ¿Cuál es el giro de esta empresa? ¿Es una empresa sanitaria o una empresa que vende agua de cordillera a los no regulados? Falta fiscalización de la Superintendencia en cuanto a los volúmenes y los costos ya que hoy solo puede fiscalizar la calidad de las aguas.

Lo primero es decir que la Superintendencia, por supuesto que fiscaliza la calidad de las aguas; también lo hace Salud. Tiene que preocuparse de que el agua que reciben las personas sea sana y cumpla con todos los requisitos, pero junto con eso no solamente tiene facultades para fiscalizar, sino que fija la tarifa. La que fija la tarifa es la Superintendencia, después de hacer un estudio de los costos, de lo que establece la ley, y si la empresa tiene diferencias respecto de eso, hay un panel de expertos en el cual se zanja cuál es la tarifa que se va a poner. De manera que no le faltan atribuciones para eso, y las tarifas se fijan por un período de cinco años.

¿Qué sucede con los servicios no regulados? La ley establece que las sanitarias son de giro único, y establece una excepción para aquellos recursos y cosas de las que dispone y de las cuales podría, por ejemplo, venderle agua a un cliente no regulado.

Establece también como excepción que podría tener un subproducto, porque supongamos una empresa que no solamente vende agua, sino que también procesa las aguas servidas. Y como resultado del proceso de aguas servidas, se produce que hay aguas servidas tratadas, y esas aguas podrían venderse, lo que hemos hablado del reúso. Podrían volverse a utilizar. No sería lógico que las botara, sino que hay que usarlas; se producen lodos activados que se pueden vender como fertilizantes para la agricultura. Hay una planta de Aguas

Andinas, que es como la más moderna, produce también biogás como producto del tratamiento de las aguas servidas.

Entonces, ¿qué establece la ley? Que se pueden vender estos subproductos, pero en nada afectan la tarifa. O sea, la tarifa no se afecta por la realidad, sino que la tarifa se fija por una empresa modelo. Por ejemplo, supongamos Antofagasta, que es el caso que a ella le preocupa. Antofagasta tiene una planta de desalinización. La forma en que se calcula es la siguiente. Se dice que Antofagasta tiene tales cantidades de agua cordillerana que viene por el río, y eso tiene tal costo en su tratamiento. Estos llegan gratis y después hay que tratarlos.

Le falta para poder completar -hoy le falta mucho, el 80 por ciento de lo consume Antofagasta es de una planta desalinizadora- un 80 por ciento, ¿cuánto vale eso? Vale lo que cuesta desalinizar en una planta del tamaño necesario solamente para eso.

Así se fija la tarifa para ese aspecto. Además, después se reduce por otra cosa. Pero la base de la tarifa es esa.

Todo lo que haga con respecto a cualquier cosa vendiéndole por ejemplo agua a una minera, a una planta industrial, alguien que no tiene tarifa regulada, los costos de todo eso son pagados por esa actividad. Si hay que ampliar la planta, todo lo que tiene que ver con el mayor costo de la planta, con la ampliación de la planta, lo paga él.

El costo de la distribución, si lo manda por camión o si tiene que hacer una cañería, todo eso va aparte. Adicionalmente a eso, lo que gana en eso revierte sobre la tarifa y reduce la tarifa. Por ejemplo, en el caso de Antofagasta la tarifa es 4,3 por ciento más barata producto del beneficio que se obtiene vendiendo a un tercero, aprovechando la ventaja que hay, una fuente de agua. Entonces, no solamente no incurre en ninguno de los costos, sino que además le llega un beneficio.

Cada día va a haber más cosas de ese tipo. Por ejemplo, en el caso de Atacama, caso que le preocupaba a la Presidenta,

es posible que eso también suceda en el futuro. La planta desalinizadora está hecha para 450 litros por segundo, pero tiene capacidad de ampliación hasta mil y además hoy día está ocupando 150. Entonces, hay posibilidad.

La señorita **CICARDINI** (doña Daniella).- Tiene la palabra el diputado Barros.

El señor **BARROS**.- Señorita Presidenta, observo que para los próximos quince años el valor del agua desalinizada tenderá a equipararse con los costos de cualquier embalse.

¿Existe algún estudio del impacto para el hemisferio sur? Hay 48 países en el ámbito del hemisferio sur donde pueden estructurarse agriculturas competitivas a partir de valores de agua similares, porque la baja en el valor del agua no solo va a ser en Chile, sino que en todos los países del hemisferio sur, lo cual generará un grado de competitividad interesante de estudiar. Cuando se proyecta una plantación por 20 años, es muy probable que pueda estar impactada por un cambio en las condiciones del agua, a partir de un menor valor del agua desalinizada. Es una reflexión. Quién, hace diez años atrás, podría haber pensado que íbamos a tener cultivos hidropónicos a partir de agua desalinizada. Hoy día sí es posible.

Lo segundo, dejo como inquietud, para que sus asesores lo anoten, los APR El Almendral y Los Amarillos, en la comuna de Chépica, Sexta Región.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Schilling.

El señor **SCHILLING**.- Señorita Presidenta, agradezco la concurrencia del señor ministro a las dos sesiones, también la información que nos ha entregado, bastante completa, acerca de lo que está haciendo el ministerio y los distintos servicios y organizaciones dentro de él sobre el tema del agua.

Yo, a raíz de las exposiciones del señor ministro, quiero consultar cuatro cosas.

La primera está relacionada con algo que dije en la sesión anterior, pero parece que no lo expresé muy bien. Al respecto, cuál es la capacidad que tiene el Ministerio de Obras Públicas, y en general el Estado de Chile, para hacer análisis prospectivo de este problema, de modo que no nos sorprendan los acontecimientos, sino que hayamos tomado las medidas desde antes, y si esto no existiera, si se piensa en instalarlo, porque todo indica que la situación que estamos atravesando se va a agudizar más que a revertir.

Segundo, a raíz de su exposición sobre los embalses, del estado en que se encuentran y de otras medidas que se están tomando, asumido el hecho de que el clima cambió, usted y el gobierno ¿estiman necesario que también la burocracia deba cambiar? Porque no podemos seguir haciendo las cosas a la velocidad que lo hacíamos antes, cuando los hechos ya están encima de nosotros.

Entiendo que la burocracia se instala cómodamente en sus rutinas, en sus tradiciones, en sus hábitos, pero el ministro Briones nos ha dicho que está bien que aumentemos los impuestos, pero junto con eso veamos cómo ser más eficaces y eficientes en gastar la plata que viene de una mayor recaudación. Todo indica que es un principio sano, pero qué estamos haciendo para que eso pase, por ejemplo en esta área, o si se piensa hacer algo.

Por otra parte, usted nos ha explicado con bastante detalle cómo se fijan las tarifas de los servicios de agua y todo parece superrazonable, no habría nada que objetarle.

Pero, por ejemplo, el modelo por el cual se fijan las tarifas, contrastado con una empresa ideal. Quiero recordarle lo que nos pasó en Osorno. Digo nos pasó, para no echarle la culpa a nadie. ¿Es razonable que una empresa, que además tiene el monopolio de la prestación de servicio de agua para 150.000 personas, deje un nochero en la custodia de las instalaciones? ¿Qué pasa si a ese señor le da un infarto?

A mi juicio, allí hay un problema que tiene que ver con la fiscalización.

Creo que en esto, todas las superintendencias, no solo la Superintendencia de Servicios Sanitarios, están en deuda, porque cuando aquí la gente alega contra los abusos de las empresas de servicio respecto de ello, en realidad están alegando contra la sensación de que se maximizan las ganancias -lo que preguntaba la diputada Cicardini respecto de lo que va a pasar en Atacama- a costa del consumidor y de la tarifa que paga.

Entiendo, ministro -usted lo dijo al pasar, consultado por el diputado Isa Kort-, que estaban haciendo unas cosas con carácter experimental, piloto.

Comprendo que en el área de las concesiones los chilenos seamos principiantes, por ejemplo, lo que nos pasó con las concesiones de las vías rápidas en la ciudad. La manera de reajustar las tarifas se estimó sobre la base de un determinado *stock* de vehículos, un supuesto sobre su crecimiento y cuántas veces iban a pasar los pódicos y cuánto tenían que pagar. En la época en que se hizo eran dos millones de vehículos y se estimaba que llegarían a tres millones y medio; bueno, estamos en cinco millones y medio. Por supuesto que las sobreutilidades hoy son gigantescas, porque todas estas empresas pusieron la plata y el riesgo con un cierto cálculo de la rentabilidad, y hoy día esa rentabilidad se ha multiplicado.

Bueno, lo mismo nos pasa con el tema del agua y de los servicios sanitarios. Antes no estaba nadie conectado, pero, ministro, ¿quién conectó a los chilenos al agua potable? Buena parte la hizo el fisco. La parte pequeña que nos faltaba se hizo después de las concesiones y de las privatizaciones. Yo no las condeno, ya lograron su objetivo: ciento por ciento de cobertura. Pero para poder cobrar adecuadamente esos servicios, y otros -yo sé que eso no lo puede resolver usted ni esta comisión investigadora-, hay que ver el ingreso de los chilenos y cuánto pueden pagar. Y eso es algo que quedará...

Y por último, ministro, sobre el tema del marco legal, usted nos expuso lo que está pasando con el tema de las patentes cobradas por no uso de los derechos de agua solicitados. Sin duda que han producido el efecto que usted nos ha explicado. En "El Observador" de Quillota acaba de salir publicada, extensivamente -porque así lo obliga la ley-, quiénes tienen que pagar patente por este concepto en todas las comunas y provincias. Uno se hace una idea de lo que está ocurriendo. Pero la pregunta, señor ministro, es si esto es suficiente y disuasivo, porque las expectativas de las ganancias que se pueden obtener por el no uso del derecho de agua obtenido puede superar mucho lo que se paga ahora, porque las expectativas del negocio, además con una crisis agudizándose, solo en su carácter especulativo puede ser igualmente conveniente. Colbún se desistió, porque se desistió de grandes obras hidroeléctricas, pero no porque le resulte completamente... No tenía alternativa del uso de los derechos de agua que había solicitado.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para prorrogar por 15 minutos la sesión?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Gahona.

El señor **GAHONA**.- Señorita Presidenta, por su intermedio, quiero consultar al ministro lo siguiente.

Usted, recién explicó de cómo efectivamente en los negocios no regulados están incorporadas en las tarifas respecto de las plantas desaladoras. Entonces, la pregunta que me surge es en el caso de las empresas sanitarias que no usan plantas desaladoras que efectivamente reciben agua, tienen derechos de agua, sacan las aguas de los ríos, procesan, producen agua potable, después las tratan y esas aguas tratadas la venden a mineras, en fin. Pero ahí no sé si efectivamente esas utilidades se comparten con rebaja de la tarifa o, de alguna u otra forma, porque, en definitiva, la ley dice que esas aguas tienen que ser devueltas al cauce, sin embargo, no se devuelven, sino que se venden.

Desde esa perspectiva, me parece que los consumidores que pagamos toda la producción del agua potable hasta el tratamiento algo tienen que recibir después de todo, porque, de lo contrario, se lo lleva todo las sanitarias. Ahora, ¿eso cuánto impacta en la tarifa y si ese impacto en la tarifa tiene correlación con el impacto de las utilidades de la compañía? Entonces, eso quisiera que me aclarara y si el proceso de las plantas desaladoras -no conozco los números, por lo que no podría hablar en detalles- el mismo proceso se aplica en las que no usan desaladoras y si, además, ese impacto en las tarifas, en términos de disminución, tiene correlación con las utilidades de la compañía.

Respecto de las patentes por no uso, solo un comentario. Efectivamente creo que esa es la fórmula, porque no altera la naturaleza jurídica el derecho de aprovechamiento de agua y sí permite impedir el acaparamiento. Sí me sigue preocupando el tema de la especulación que podría ser por la vía de la patente y creo que ese es el camino y no necesariamente el modificar la naturaleza jurídica de los derechos de aprovechamiento de agua.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Kort.

El señor **KORT**.- Señorita Presidenta, solo para reafirmar lo señalado por los diputados Gahona y Schilling de la regulación con respecto a la desalinización.

Se lo planteo, ministro, porque tanto la Presidenta de la comisión como el diputado Gahona y yo somos integrantes de la Comisión de Minería y Energía y hace unos meses estuvimos viendo la nueva ley de distribución energética, la ley corta, particularmente donde se fija el modelo de empresa modelo, más allá de que exista una superintendencia que regule.

Tiendo a coincidir con lo que plantea el diputado Schilling de si ese modelo después queda grande o queda corto. ¿Por qué se lo digo? Y usted lo nombre. Aquí, por ejemplo, hay intentos de desalinizar aguas por parte de privados que no van a vender esa agua, como es Codelco, en este caso, que

actúa como privado. Entonces tiene una regulación distinta de la que quiera dar el servicio de desalinización de aguas para fines agrícolas o para otros fines. Por lo tanto, no sé si esto tiende a ser regulado vía superintendencia o mejor se discute en la ley de desalinización que usted planteaba. En el fondo, saber las luces y no la respuesta exacta, porque sé que no se ha debatido ni mucho menos, pero es coincidente lo que pasa, porque no es lo mismo la desalinización en Antofagasta para regar lechugas que desalinizar para abastecer a la minería.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ministro, entiendo la campaña que se ha desarrollado en las últimas semanas a propósito de cuidar el agua, creo que es una medida muy loable si uno lo entiende desde el punto de vista de la educación, de mayor conciencia en la población. Pero respecto de la responsabilidad que finalmente se adjudica a los ciudadanos y ciudadanas ahí es donde quiero hacer mi pregunta, porque, por lo menos, para mí es cuestionable cargar la mano a la gente -y en su exposición lo dijo usted con mucha claridad-, porque quienes son los mayores consumidores de agua a los largo de nuestro país es la industria minera, agrícola, forestal. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas que ha adoptado el gobierno frente a estos 3 sectores productivos para cuidar el agua, generar conciencia y asumir responsabilidades?

Entiendo que, a grandes rasgos, usted señalaba el tema de la tecnificación. ¡Ese puede ser un punto!

¿Qué ha pasado con la minería? ¿Se le ha exigido algunas medidas o algunas acciones como para poder hacerse cargo del contexto del cambio climático? Porque, fíjese, usted, ministro, que en 2017 se generó una comisión investigadora de cuencas, ríos y glaciares y una de las mayores conclusiones fue algo bastante gráfico, cual es la descoordinación, porque, en verdad, no existe de los distintos órganos del estado. Entonces, esa descoordinación intersectorial la tenemos más que clara y es un diagnóstico que todos

manejamos. ¿Qué medidas se han adoptado frente a esa tremenda debilidad?

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señorita Presidenta, parto por los comentarios del diputado Barros.

El costo del agua para la agricultura es vital y efectivamente si cambiara la tecnología de desalinización y fuera mucho más barata, no afectaría solo a Chile, sino a todos.

Sin duda, pienso -y esto es fuera del tema específico de la comisión- que el cambio climático está afectando a Chile aparentemente más fuerte que en otros lugares. Nos está afectando, además, donde está toda la potencia de actividad y particularmente en la agricultura y donde está la inmensa mayoría de la población de Chile, en toda la zona centro sur y centro norte, entre Atacama Ñuble o Maule. De tal manera que tener menor disponibilidad de agua o, puesto de otra manera, tener un costo de agua más alto, nuestra posición relativa también puede ser afectada.

Si mañana hubiera una desalinización que permitiera igualarse a las fuentes naturales, eso eliminaría las ventajas, pero hoy tenemos una, por lo menos, en esa zona, lo cual es claro cuando uno compara esas zonas con otras más secas que tiene Chile. En esos lugares existe buen suelo, pero no existe agua a un valor competitivo para desarrollar la agricultura que es parte, por ejemplo, de algunas de las cosas que se dicen respecto de las carreteras hídricas. Si uno fuera capaz de trasladar y llegar ahí a un costo razonable, podríamos tener muchas más hectáreas agrícolas, pero eso depende de hacerlo en forma razonable.

Respecto de las preguntas del diputado Schilling, la primera, él mencionaba la capacidad de hacer análisis prospectivo. Bueno, esta es una cosa que va más allá de un ministerio en particular, ya que tiene que ver con el país y con el mundo.

En esta materia si ha habido una falta ha sido que hemos tenido sequía, hemos tenido algunos momentos buenos y la decisión de decir: "Bueno, esto es permanente y no transitorio.", quizá, se debió tomar antes. Hoy llevamos 11 años consecutivos de sequía, entendiendo por sequía que tenemos menos lluvia que el promedio y creo que solo hoy estamos tomando la decisión de decir: "¿Sabe qué más? Tratemos esto como una cosa permanente. Cambiemos la legislación, hagamos inversiones en esto, hagamos inversiones en lo otro.". No es que antes no se haya hecho nada, pero tiene que ver con una cosa distinta de cómo uno enfrenta una cosa transitoria con una permanente.

Hoy existe suficiente información, tanto de lo que sucedió atrás, pero mucho más importante es que hoy existen 32 modelos de cambio climático en el mundo, y los 32 coinciden en que las zonas centro sur y centro norte de Chile van a seguir siendo afectadas por una reducción en la cantidad de agua. No digo reducción respecto de hoy, pero tomando la línea de lo que teníamos en promedio, hemos bajado más o menos 10 por ciento por década la disponibilidad de agua y, además, hay un aumento de las temperaturas.

Entonces, si hay algo bueno que tiene el 2019 y el 2020 es que nos ha hecho -por un evento extremo, esperemos que este año no se repita- ver hacia dónde vamos. Nos hace pensar en la prospección, porque hay todo tipo de análisis sobre lo que podría pasar con el clima, pero lo más importante es que si uno cree que eso se va a dar y ya tomó la decisión de qué así va a ser, lo que tiene que hacer es prepararse. Y para poder prepararse, tiene que ver con las cosas que hemos estado hablando, debemos tener las obras para vivir con ese nivel de abastecimiento de agua. Debemos cuidar el agua, como es necesario cuando el agua es así de escasa; debemos tener sistemas de fiscalización, trabajos de los usuarios, en fin, como sucede en los lugares donde existe esa disponibilidad mucha más baja de agua. Yo diría que esa es la decisión que

hemos tomado y que debemos tomar como país para avanzar en esto.

Siguiendo con la segunda pregunta, respecto de si el clima cambió y si el Estado va a cambiar su velocidad, es absolutamente imprescindible. Esto no tiene que ver solo con este tema, tiene que ver con todo, pero en eso -no por contradecir, sino por agregar- el Congreso tiene una tarea muy importante. Cada ley, cada cosa que se regula, cada requisito que se pone, que apunta hacia un objetivo positivo, hay que ver cuál es el costo que se impone. Los datos que les he dado son solo para cumplir normas que han sido realizadas por el Congreso. Ahí no está puesta la ineficiencia, porque en el documento que dejé está, por un lado, lo que es cumplir las normas y después viene la ineficiencia. O sea, cuando usted va a ver la realidad, los plazos son el doble, no son 15 años, son 30 años. Los embalses que estamos haciendo se demoran como 30 años, porque siempre hay un problema, algunos por ineficiencia, otros por judicializaciones o conflictos, pero al final es ineficiencia porque no estuvo claramente determinado quién podía hacer qué.

Ahí tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros estamos dispuestos a determinar cómo podríamos hacer cosas que, cumpliendo con los objetivos, cumpliendo con lo que queremos salvaguardar, nos permitieran hacer esto en forma más rápida.

Usted preguntaba qué se puede hacer. Lo que podemos hacer es trabajar en conjunto y ver qué cosas podríamos hacer, cumpliendo los objetivos, de una manera más rápida en la parte que tiene que ver con el Ejecutivo, con los organismos independientes que tienen que ver con esto, poniendo su parte para hacer las cosas de una manera más rápida, tomando conciencia de la emergencia que tenemos, pero revisando las normas, porque lo que hay que cumplir, en sí mismo, ya requiere un tiempo muy prolongado.

La tercera pregunta tiene que ver con la fijación de las tarifas sanitarias. Quiero hacer una pequeña corrección, si es que lo que dije se entendió de esa manera: todo no está

perfecto, está lejos de perfecto. Solo he explicado cómo funciona, para que se entienda qué es lo que produce, por ejemplo, la venta a un cliente no regulado de una sanitaria, y lo que hoy se produce es un beneficio en la tarifa del cliente regulado, por lo tanto, baja el precio que tiene que pagar, pero no quiere decir que todo esté perfecto. Osorno es una demostración de que no todo está perfecto. No todo está perfecto con la compañía o con las compañías ni con la regulación; de hecho, estamos presentando un proyecto de ley que modifica la legislación por la cual se fiscaliza, se regula, se fijan las tarifas, en fin, respecto de las empresas sanitarias. Ahí hay tres leyes que determinan el conjunto de cómo se regulan las sanitarias y creemos que hay que regularlas. Creemos que hay que mantener las cosas buenas, como una buena cobertura, una buena calidad, que tengamos tratamiento de las aguas, pero podemos hacer más y ser más eficientes.

El momento que estamos viviendo de sequía tiene las reservas de las ciudades de la zona central de Chile en el mínimo; lo he dicho públicamente, pero lo repito aquí. Estamos en el límite y estamos trabajando todos los días para que no haya problemas en ninguna parte, porque hay lugares que tienen más y otros que son los más débiles, y el primero que se cae es el más débil. Entonces, estamos trabajando en cada uno de esos lugares, para que eso no suceda.

Todo esto de cuán resiliente es el sistema y cuánta redundancia tiene el sistema, tiene que ver con los planes de desarrollo de estas compañías, qué inversiones hacen. Entonces, tenemos que tomar una decisión y decir: "Bueno, cuán resistente y resiliente queremos el sistema de agua potable de las ciudades de Chile", frente a un escenario en que creemos que vamos a tener una sequía más permanente y que un evento como el del año 2019-2020, si bien es muy extremo, podría volver a repetirse. Tenemos que estar preparados con mayor fuerza para enfrentarlo. Entonces, por las razones que usted menciona de Osorno, por la forma cómo se tarifica, por

la forma en que fiscaliza, en fin, hay que hacer modificaciones, pero no que tengan que ver con el hecho de si hay que hacer una empresa modelo o no, porque esas son todas cosas positivas, que han demostrado, en otros servicios chilenos y en el mundo, que funcionan positivamente para los consumidores. Pero yendo más al detalle, hay un montón de cosas, algunas de las que usted ha mencionado y otras que mencionó el diputado Issa Kort, en las que podemos hacer mejoras.

Respecto del marco legal y la patente de no uso, de si es suficientemente disuasivo o no, ya mencioné lo que pensamos. Primero, quería dar los datos respecto de lo que ha sucedido en la práctica. En la práctica, ha sido disuasivo. Alguien mencionó que se refiere a Aysén, pero es que no todos son de Aysén, porque en Los Lagos hay más de dos millones de litros por segundo que han sido devueltos, y en La Araucanía tenemos un millón de litros por segundo que han sido devueltos. Hay una cosa que es más bien del país, que de un lugar en particular, pero no creo que sea suficiente.

Por esa razón, lo que hemos propuesto, en una indicación, que hicimos llegar a la Comisión de Agricultura del Senado, es que la patente no tiene que ser 10, 20, 40, sino 80, 160, 320, y así en adelante y seguir. O sea, el agua es de todos los chilenos y se la entrega a las personas para que hagan uso de ella, para que realicen una función, como beberla, bañarse, lavar tomates, para la minería, para lo que se necesite. Son actividades productivas que van en beneficio de personas, de entidades y del país. Si esas personas no la van a ocupar, eso debe tener un costo y si eso es permanente, lo tienen que revertir.

Por lo tanto, nos parece que para la patente de no uso - esta es una ley del gobierno del Presidente Lagos-, hay que mirar los datos efectivos, y los datos efectivos demuestran que esta es una política pública que tiene sentido, y que para que no se dé el hecho de que en algunos casos el

beneficio pueda ser aún mayor que el valor de la patente, hay que seguir incrementándola.

Así que respecto del suficiente disuasivo, concuerdo en que puede no ser el suficiente disuasivo en algunos casos. Por lo tanto, no debe tener techo, como lo tiene. Hoy tiene un techo que no puede seguir subiendo.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para prorrogar la sesión por cinco minutos?

Acordado.

El señor **SCHILLING**.- ¿Caduca?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Hoy no caduca, simplemente se sigue pagando el mismo valor, pero es un tema que...

El señor **SCHILLING**.- A la tercera vez.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Claro, tiene tres tramos. Por eso digo que es 10, 20, 40. Si el primero era 10, sube a 20, sube a 40, y 40 es permanente.

El señor **GAHONA**.- El derecho no caduca, se devuelve.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Y, tienen dos valores distintos. Hay un valor para consuntivos, otro para no consuntivos, en fin, son dos valores distintos y es mucho más bajo el no consuntivo. A pesar de que es más bajo el no consuntivo, se devuelve; pero hay muchas menos personas afectadas por el consuntivo, porque la mayoría de las personas, en el caso de la agricultura, lo ocupan y es mucho más dispersa la propiedad del agua, a pesar de todo lo que se dice.

En el caso de lo que mencionaba el diputado Gahona, la tarificación de los servicios no regulados en las sanitarias sin desalación es exactamente igual, el principio es el mismo. La tarifa se fija en base a una empresa modelo que toma el caso particular de esa ciudad. Dice: ¿cuáles son las fuentes de agua mejores que tiene esta ciudad? Por ejemplo, el caso de Antofagasta.

Da lo mismo que tenga desaladores, ¿cuál es la más barata?

La cordillera.

¿Cuánta agua tenemos de la cordillera? Esto.

¿Cuánto le falta? Esto otro.

¿Cuál es la mejor alternativa para proveer eso? Una desaladora. Bueno, eso tiene costo de desaladora, y de esa manera se determina, y esto es independiente.

Pero ahí hay cosas que ver, como ya mencionamos en la respuesta anterior, por ejemplo, cómo se considera el costo de la red, si cada vez hay que construirla. Yo creo que ahí hay cambios que hacer. Como les digo, va a estar en el proyecto que vamos a enviar ahora mismo.

Funciona exactamente igual y no tiene diferencias.

Respecto de la patente por no uso, lo que ya mencioné.

En el caso de legislación para desalinizar, hoy día lo que hay es un proyecto que está en el Senado y está listo para ir a la Sala. Es una sola legislación para desalinizar, y creo que es correcto que sea una sola. Lo importante es que cubra los problemas que pueda tener la desalinización, como el medio ambiente, como la ubicación en la costa, en fin, pero teniendo mucho cuidado de no crear un desincentivo a la desalinización, porque si no tuviéramos plantas de desalinización y la gente no quisiera invertir en eso, tendríamos un severo problema en toda la zona norte de Chile.

Hoy día se hacen esas plantas, se están construyendo, hay una gran demanda para hacerlas, se puede ordenar, se puede organizar, pero lo que no puede ser, es que se produzca una situación en la cual... Entonces, hay que ser cuidadoso respecto de ese tema.

Finalmente, la última pregunta es de la Presidenta y tiene que ver con la campaña de medios.

Como ya lo he mencionado, la campaña apunta a todos los chilenos, las personas que son gerentes de una empresa agrícola o de una empresa minera o de cualquiera que ocupe agua, también ve los mismos medios de comunicación, y lo que pretendemos es sensibilizarlos a todos.

Junto con ello, además, la campaña remite a la página web cuidemoselagua.cl, y lo primero que la gente se encuentra ahí

son las medidas para todos, los grandes consumidores urbanos, por ejemplo, las municipalidades y grandes instituciones que tienen grandes parques y cosas así, lo que se está haciendo en la agricultura, lo que se está haciendo en la minería, en fin.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- ¿Y qué se está haciendo en esos casos?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señora Presidenta, el caso de la agricultura ya lo mencioné. En el caso de la minería, diría que debe ser de los sectores que está haciendo un cambio más grande.

La minería está entre Rancagua y Tarapacá, más o menos, siendo lo fuerte la zona norte. Son ellos los que han puesto y los que tienen los proyectos en materia de desalinización, ya sea para desalinizar, ya sea para usar directamente agua de mar; por lo tanto, ellos están en un proceso muy activo y muy fuerte de dejar de usar el agua de las fuentes naturales y utilizar las fuentes de desalinización.

De los 5,6 metros cúbicos por segundo que se están produciendo desalinizados hoy, 4,5 o 4,6 son de la minería, y 1 es para consumo humano, más o menos. Es decir, el 80 por ciento del agua desalinizada en Chile es producto de inversiones de la minería, y lo mismo ocurre en los proyectos que vienen hacia adelante. Hoy tenemos proyectos entre 12 y 13 metros cúbicos por segundo, y de eso debe ser entre el 80 y el 90 por ciento en minería.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para oficiar a los Ministerios de Agricultura y de Minería para que informen cuáles son las acciones o medidas que se han adoptado para hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Sergio Gahona.

El señor **GAHONA**.- Señora Presidenta, respecto de la minería, es la que está construyendo más plantas desalinizadoras, pero entiendo que es para complementar y

hacer una acción para lo que necesitan, pero no es que estén devolviendo derechos de agua.

Ahora, ideal sería que esa agua que están desalando reemplace el 100 por ciento de los derechos de agua, porque los obtienen gratuitamente al constituir, pero al final pasan a ser parte del patrimonio y de los activos de las compañías, y evidentemente gratis no lo van a devolver.

Entonces, yo creo que ahí hay un tema que más que una ley, es una conversación que hay que tener con las mineras, porque si están construyendo plantas desalinizadoras de manera importante, que las construyan con la capacidad completa, no solo para complementar lo que falta, sino para reemplazar totalmente el uso de agua dulce.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Ministro, ¿el Ejecutivo no ha patrocinado la reforma al Código de Aguas que está en la Comisión de Agricultura, en el Senado?

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señora Presidenta, entregamos en enero del 2019...

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Cien indicaciones.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- ...indicaciones a eso, y hemos estado trabajando con la comisión, porque todavía sigue en la Comisión de Agricultura.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Se lo pregunto porque en el entendido de que el uso de las únicas facultades exclusivas que tiene en este caso el Ejecutivo para ponerle tiempos, plazos acotados, es como la voluntad política que eventualmente podría tener el gobierno para darle celeridad a esa discusión, sobre todo con el escándalo que ha pasado en el sur por los remates de derechos de agua en los ríos, en los esteros. Evidentemente, eso está permitido en el Código de Aguas y que la verdad se rematan cuando no hay pago de patentes.

Eso es algo bastante cuestionable y por eso creo que el gobierno debería hacerse parte para darle mayor celeridad a la tramitación de la reforma al Código de Aguas.

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.

El señor **BARROS**.- Señora Presidenta, que quede bien aceptado que el ministro explicó claramente que se trata de derechos no consuntivos y que se rematan en virtud de que hay más de una solicitud. O sea, no es que el Estado esté vendiendo a diestra y siniestra los derechos de agua.

Cuando hay derechos no consuntivos que no están siendo aprovechados por el Estado y si hay más de un particular que esté interesado en esos mismos derechos, lo que dice la ley es que hay que rematar. No es que estén rematando a la "chuña".

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Y además cuando no se pagan las patentes.

El señor **BARROS**.- Señora Presidenta, es que son derechos que ya fueron devueltos por los usuarios cuando no los utilizan y no están dispuestos a pagar las patentes.

Eso fue una explicación que al menos me quedó muy clara.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Si, a mí también. No he dicho lo contrario.

El problema radica en que también es cuestionable, porque eso es permitido porque está en el Código de Aguas. No estoy diciendo que están en una ilegalidad; eso hoy está.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señora Presidenta, si me permite, no entiendo qué es tan cuestionable. Está en el Código de Aguas y en el nuevo Código de Aguas que se está tramitando es igual. No hay diferencia.

Tiene que haber una manera. Usted señala que hay personas que no pagan la patente, y por esa razón se están haciendo los remates.

Los que estamos viendo no son esos.

También existe eso en la legislación, pero no son esos. Las personas simplemente no han hecho eso, sino que simplemente los han devuelto.

No es que dejaron de pagar y llegó alguien, sino que pagaron y dijeron, ya no voy a pagar más, aquí están, y los devolvieron. Estoy hablando de la generalidad.

Los remates que están sucediendo hoy son hechos por la Dirección General de Aguas en aplicación estricta de lo que dice la ley. La ley dice que si dos personas o más piden un derecho y no existe capacidad para darle lo que ambas personas están solicitando, siendo cualquier persona, personas naturales, una empresa, lo que sea, y piden derechos en un cierto lugar, por ejemplo, para hacer una central de paso, por decir cualquier cosa, porque de eso es lo que estamos hablando. En general, el 95 por ciento se refiere a eso. Entre paréntesis, cosas pequeñas también, pero aparte de eso; entonces, hay que sacar de un lugar y poner en otro lugar.

Lo que establece la ley es que hay que asignar entre las personas.

¿Cómo usted asigna entre dos personas? La única manera que existe hoy día en la ley, y nosotros tenemos que cumplir la ley, es aplicar este remate.

La señora **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Perfecto. O sea, me da la razón de que necesariamente, y de manera urgente, hay que reformular, reformar, cambiar, mejorar a los nuevos tiempos el Código de Aguas, y yo esperaré una acción más activa por parte del Ejecutivo para ponerle celeridad.

A ustedes les gusta que avancemos en una agenda rápida, y quiero decirle que el agua es un tema muy sensible y es parte de la demanda ciudadana que provocó el estallido social.

Entonces, también sería parte de las prioridades y de los compromisos que debiese asumir el gobierno para poder avanzar rápidamente. Esta reforma ya la despachamos en la Cámara de Diputados.

No voy a entrar a ver cuál es la posición del gobierno, o cuáles pueden ser las eventuales modificaciones o qué les hace a ustedes más sentido, en fin, eso es parte del debate democrático que debiese tener el Congreso, nada que decir con respecto a aquello, pero sí que la rapidez depende del Presidente.

Por consiguiente, cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno, a propósito de lo que nos convoca como comisión investigadora. La reforma al Código de Aguas -la normativa, la legislación- y no solo la infraestructura de los embalses y las obras son parte de los compromisos.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Señorita Presidenta, concuerdo plenamente con usted, por eso lo mencioné.

Primero, hemos presentado indicaciones en el mes de enero, en relación con todo lo que dice el Código.

Segundo, lo que despachó la Cámara -lo que usted menciona- incluye los remates, el mismo remate que a usted le parece mal. Entonces, la aplicación del nuevo o del antiguo, respecto de este punto, no haría diferencia.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Pero el sentido de urgencia, a eso voy.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Usted ha hecho muchas aseveraciones y tengo que contestárselas de a una. Pero respecto de los remates, como señalé, no se refiere a personas que no han pagado, sino que hay más personas que derechos, y por ley hay que otorgárselos. La ley lo establece hoy, y aparentemente -porque podría ser que terminara en otra cosa-, podría determinar que fuera hoy. Pero ni en las indicaciones del Presidente, que hicimos en enero, ni en las que hizo la Cámara de Diputados, hay modificaciones respecto de ese punto.

En relación con la urgencia, quiero mencionar que hoy, junto a la Comisión de Agricultura del Senado, estamos trabajando en el Código de Aguas tres días a la semana, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, en forma ininterrumpida. La comisión espera sacarlo antes del 23. La idea es sacarlo antes de irse en febrero, y para poder lograrlo estamos trabajando tres días completos a la semana; de hecho, recién preguntaron por qué no estaba el director general de Aguas; bueno, el director general de Aguas se

encuentra en estos momentos en la discusión del Código de Aguas.

Tanto el Senado en la comisión, con todos sus integrantes, como el Ejecutivo, están poniendo todos los esfuerzos posibles para poder sacarlo lo más rápido.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Me hubiese gustado ver una señal más clara y gráfica en algo tan sencillo, como la facultad exclusiva del Presidente de ponerle urgencia a un proyecto necesario y urgente.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Le agrego la información a eso entonces: le hemos puesto urgencia cinco veces ya.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Eso fue lo que le pregunté, pues, si tenía urgencia o no.

El señor **MORENO** (ministro de Obras Públicas).- Tiene urgencia, tanto en lo que señala el Ejecutivo para las prioridades que tiene el Congreso, como en términos del trabajo que estamos realizando en común, y también con respecto de las indicaciones que se presentaron, en todos los temas.

Entre paréntesis debo decir que, a diferencia de lo que se piensa, en general, coincidimos en la mayoría de las cosas, porque la mayoría de las cosas no es de lo que se está hablando aquí: la temporalidad, si pueden terminarse o no, sino que otras miles de cosas que están en el Código de Aguas, donde hay mucho acuerdo.

La señorita **CICARDINI**, doña Daniella (Presidenta).- Bueno, le quiero agradecer al ministro y a quienes lo acompañan.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 13.00 horas.

ALEJANDRO ZAMORA RODRÍGUEZ,

Redactor

Coordinador Taquígrafos Comisiones.